



Buen abandona la alcaldía de Errenteria tras 18 años al frente de la corporación

► El actual teniente de alcalde, Juan Carlos Merino, asumirá el cargo en funciones y se prevé que sea elegido primer edil

SAN SEBASTIÁN. DV. El alcalde de Errenteria, el socialista Miguel Buen, abandonará este cargo, al que accedió hace 18 años, para dedicarse a su nuevo cometido como vicepresidente primero del Parlamento Vasco, informaron fuentes del PSE-EE.

Buen explicará hoy en una conferencia de prensa los motivos de su renuncia a la alcaldía, que asumirá en funciones el actual teniente de alcalde, el socialista Juan Carlos Merino, hasta que un próximo pleno municipal elija al nue-

vo primer edil, cargo que previsiblemente ocupará el propio Merino, según indicaron fuentes socialistas.

Miguel Buen accedió en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de abril al cargo de parlamentario vasco y posteriormente fue elegido vicepresidente primero de la Cámara. Además, es procurador en las Juntas Generales de Gipuzkoa y secretario general del PSE-EE de este territorio.

El actual parlamentario nació

hace 57 años en Ardisa, un pueblo de Zaragoza, y llegó con 17 años a Gipuzkoa, donde empezó a trabajar en la factoría de Ramón Vizcaino en Oartzun. Cuando contrajo matrimonio, se trasladó a vivir a Errenteria, donde han nacido sus tres hijos.

Buen aprendió en su familia la cultura de la izquierda, en donde la memoria histórica de la guerra y de la derrota republicana ha estado siempre muy presente. Sus tios y su padre militaron en la UGT y fueron perseguidos por las

tropas franquistas. Uno fue fusilado, otro huyó a Francia pese a resultar herido en una pierna en el frente de Huesca, y su padre se salvó «de milagro», aunque vivió años represaliado. Su hermano Alberto, que también siguió el camino de la política, fue alcalde de Irún y en la actualidad es senador socialista.

El todavía alcalde de Errenteria representa en Gipuzkoa a la corriente mayoritaria de su partido, caracterizada por la tradición pactista. Fue uno de los principales artífices del denominado pacto de San Marcos entre socialistas guipuzcoanos y vizcainos, que aupó a Patxi López al frente del PSE-EE. ■

Gesto por la Paz pide al Gobierno que disipe toda sospecha de torturas

SAN SEBASTIÁN. DV. La coordinadora Gesto por la Paz reclama al Gobierno central que «disipe cualquier sospecha» de torturas a detenidos. Para ello, le pide que investigue las denuncias que se presenten, en lugar de «despacharlas con indiferencia o diciendo que todas son mentira». En una nota, el portavoz de Gesto, Fabián Laespada, recuerda que las supuestas torturas a Unai Romano, archivadas por el juez, es «uno de los pocos casos en el que se deduce con claridad el trato recibido en dependencias policiales». ■

La AVT denuncia presiones del Gobierno en Ermua para anular un acto por las víctimas

MADRID. El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, acusó ayer al Gobierno central de haber presionado al Ayuntamiento de Ermua para cancelar un concierto homenaje a las víctimas del terrorismo previsto para el próximo 10 de julio, fecha en la que fue secuestrado el concejal del PP Miguel Ángel Blanco. A su juicio, el Ejecutivo lleva a cabo actuaciones de «presión, acoso y derribo contra cualquier forma de expresión que pueda homenajear a las víctimas del terrorismo».

En una conferencia de prensa convocada para denunciar la anulación del concierto, Alcaraz recalcó que, «lamentablemente, vemos otra vez cómo una iniciativa ha sido acallada por el Gobierno», y aseguró que cualquier acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, «especialmente las de ETA, incomoda» al Ejecutivo. Por ello, en su opinión «el poder se quiere imponer a la respuesta de la sociedad, que quiere recuperar la memoria de las víctimas del terrorismo».

El concierto se canceló el pasado 31 de mayo debido, según dijo el responsable de la empresa organizadora, Francisco Arriola, a «presiones del Gobierno», que no quiere que «sea escuchada la voz de las víctimas en pleno proceso de negociación» con ETA.

Según su versión, un miembro del Ayuntamiento de Ermua, gobernado por el PSE, explicó el mismo día de la anulación que el concierto no se podía celebrar a causa de «disyuntivas» entre las agrupaciones de víctimas y porque, añadió, «no era el momento histórico adecuado». Pero, tras la pregunta de si habían existido presiones del Gobierno, este miembro del consistorio de Ermua «no desmintió» nada, explicó ayer Arriola. El promotor recordó que a la iniciativa se habían sumado quince grupos musicales y diversas personalidades del mundo del deporte, la cultura y el cine. ■

EUROPA PRESS